

los jueces acusados, parece conveniente que no se mantengan con procedimientos de esta especie, los últimos restos de la discordia política que amenazó perturbar la paz pública en aquella parte interesante de la Federación.

2º No hay dato alguno para presumir fundamento que alguna motivo innoble y criminal haya determinado la conducta oficial de los acusados.

3º Si los jueces acusados se afectaron de las pasiones políticas que dividieron á los partidos contendientes, hay que tener en cuenta, que en las capitales de los Estados en donde las cuestiones políticas se agitan mas terriblemente haciendo sentir su influencia en todos los círculos de la sociedad, es muy difícil que los jueces se mantengan perfectamente extraños á la agitación general, y muy fácil que, aun sin apercibirse de ello y contra su voluntad é intencion, se dejen afectar por esa clase de cuestiones.

4º Si por regla general conforme á la ley de responsabilidad, no debe molestarlo á los jueces por la mala inteligencia de las leyes, y por los errores que á este respecto cometan, esta consideracion obra mas poderosamente respecto de la ley de amparo, institucion nueva que no adquirirá su perfecto desarrollo, sino cuando pasado mucho tiempo la jurisprudencia de los Tribunales establezca su inteligencia práctica, sin las dificultades, vacilaciones y dudas que actualmente tienen.

Por las consideraciones expuestas, esta Sala, sin dar su asentimiento á los fundamentos en que se apoyó el Tribunal de Circuito para dictar su repetido auto de 7 de Enero último, decreta de conformidad con el pedimento fiscal:

1º Que es de confirmarse y se confirma el citada auto, en la parte resolutive que

levantó la suspension impuesta á los jueces acusados.

2º Se hace á éstos el mas serio extrañamiento, apercibiéndolos que si en lo sucesivo reinciden en faltas de esta naturaleza, se procederá con toda severidad á lo que haya lugar conforme á las leyes.

Hágase saber, devolviéndose las diligencias respectivas al juzgado de su origen, con copia certificada de este auto, y archivándose á su vez el Toca.—*Ignacio Ramirez.*—Una rúbrica.—*Luis Velazquez.*—Una rúbrica.—*Justo Sierra,* secretario.—Una rúbrica.

Son copias que certifico. México, E. Bre-ro 26 de 1875.—Por el O. Secretario, *Manuel Hernandez Villareal,* Oficial mayor.

COMISO.

Juicio seguido en el Juzgado de Distrito de Yucatan, sobre comiso de once bullos de Mercancías que estaban ocultos en el rancho llamado Zuculá.

Sentencia del O. Juez de Distrito.

En la Ciudad de Mérida, á 1º de Junio de 1874 años, hallándose en audiencia pública el C. Lic. Yanuario Manzanilla, Juez de Distrito de este Estado, le di cuenta con estos autos de juicio de comiso seguido contra el vapor español «Lola» y sus efectos; y habiendo visto en ellos las diligencias previas al juicio verbal; las actas de éste; lo alegado en él; la citacion para sentencia; los documentos agregados para mejor proveer, con cuanto mas ver y tener presente convino:

Considerando: Que despues de anclar el vapor español «Lola» en el puerto del Progreso, y de hacer sus operaciones de des-

carga conforme á su manifiesto general y facturas, fué denunciado diciéndose que tenia efectos de contrabando á bordo, los cuales no se encontraron sino por medio de dos visitas de fondo, fuera de la ordinaria, que se practicaron con toda escrupulosidad, al grado que en la carbonera del buque fueron descubiertos y aprehendidos siete bultos de efectos.

Considerando: que los catorce bultos de efectos hallados y aprehendidos en el rancho Zuculú, tienen la misma numeracion correlativa de los siete bultos extraídos del "Lola", con alguna excepcion, la misma marca A. y el nombre "A. Casado," que es el del que hizo de sobre cargo en el viaje, segun la declaracion del Piloto D. Pedro María Perez, con la circunstancia de haber sido encontrados en dicho rancho, situado en la playa del Progreso la noche inmediata al dia en que fueron aprehendidos los siete bultos á bordo, cuyos antecedentes y el de no haber sido reclamados hasta hoy por nadie, prueban de una manera indudable que los referidos catorce bultos de efectos extranjeros, formaban parte del cargamento del "Lola", así como los siete bultos de que se ha hecho relacion.

Considerando: que la frac. 5ª, art. 86 del Arancel de aduanas marítimas y fronterizas de 1º de Enero de 1872, en que se cree comprendido el presente caso, penado en triples derechos por la frac. 3ª art. 87, se refiere á la omision de uno ó mas bultos del cargamento de un buque en el manifiesto general que deben entregar los capitanes; pero cuando uno ó mas bultos se presentan á la aduana entre la carga, al tiempo de la descarga del buque, tal que la citada frac. 3ª art. 87 expresa, que al imponerse la pena se hará á las mercancías contenidas en el bulto ó bultos venidos fuera de manifiesto, lo que no se ha hecho con los bultos en cuestion, pues que en vez de entregarlos el capitán del vapor "Lola" á la aduana marítima, los ocultó hasta que fueron descubiertos y aprehendidos, siete

á bordo del vapor y catorce en el rancho Zuculú.

Considerando: que por lo expuesto se infiere, que los catorce bultos aprehendidos en el rancho Zuculú, distante mas de una milla á barlovento del Progreso, se practicó un desembarque clandestino por aquella costa, en contravencion á la frac. 1ª art. 86 del Arancel de aduanas, penado en la frac. 1ª art. 87, no constando que haya sido por arribada forzosa, y con los siete aprehendidos á bordo, se ha infringido la frac. 2ª de dicho art. 86, habiéndose hallado dichas mercancías en el puerto del Progreso sin los documentos prevenidos por el Arancel, comprendiendo el puerto hasta la Zona de mar territorial de su frente en que andan los buques, dentro de la cual se hallaba fondeado el "Lola", y cuya infraccion castiga la frac. 1ª art. 87.

Considerando: que por todo lo dicho se vé, que en el presente caso hay dos infracciones de ley, siendo la primera la cometida con los catorce bultos de efectos extranjeros pertenecientes al cargamento del menado vapor Español, aprehendidos en el rancho Zuculú; pero aun cuando hubiera duda de que no está suficientemente probado, como lo está, que los catorce bultos formaban parte del cargamento de aquel vapor, siempre se impondria la pena respectiva por los siete bultos aprehendidos á bordo, aprehension que toca á la segunda infraccion.

Considerando: que la pena de confiscacion que señala el art. 87 del Arancel de aduanas, no es la que prohibe el art. 22 de la Constitucion federal, porque ésta es la confiscacion de bienes ó la adjudicacion que se hace al Fisco de los bienes de algun reo, la cual se introdujo como un doble castigo que recaia sobre los herederos del delincuente; y aquella es, la confiscacion parcial llamada comiso, ó pérdida de la cosa, padecida por el que hace contrabando: Escribe, arts. Comiso y Confiscacion.

Considerando: que tampoco se puede ta

ner como la multa excesiva tambien prohibida por el mismo artículo constitucional; y para llegar á este conocimiento, basta tener presente lo que á este respecto dice Escriche, á saber: que las multas establecidas por nuestras antiguas leyes se redujeron á extraordinarias ó arbitrarias por necesidad, á causa de que habiendo bajado tanto desde entonces el valor del dinero, corrian inútiles y despreciables si se observaran segun la tasa; pero que para evitar desigualdad, debia determinar la ley, no la cantidad absoluta, sino la relacion de la multa con los bienes del delincuente, pudiendo ser éste multado en la octava, cuarta ó tercera parte de sus bienes, siendo no solo esta relacion, sino tambien la que debe existir entre la falta y la multa, la que quiere que se guarde el artículo constitucional al prohibir la multa excesiva, relaciones que no se ha probado se dejen de guardar en la pena que se imponga en el presente juicio.

Considerando: que los efectos que forman la nota de rancho del vapor "Lola," constantes de inventario, fueron manifestados á la aduana marítima de Progreso oportunamente en los términos que prescribe la ley, por cuya razon no merecen ninguna pena, ni se puede imponer por ellos, como no se puede imponer por los efectos que vinieron legalmente manifestados y se despacharon en tiempo hábil.

Considerando: que no se puede conocer personalidad alguna en este juicio al vico cónsul Español, así por que ninguna le dan las leyes de comisos, ni la ley consular de 26 de Noviembre de 1859, ni podrían dársele, porque él es representante de sus nacionales mientras se sujetan á las leyes del país; pero cuando faltan á éstas, entonces se les juzga como á cualquier mexicano, con las garantías que otorgan las mismas leyes, sin intervencion del cónsul.

Considerando: que ningun valor legal pueden tener las protestas hechas por los Sres. Ezequiel Fernandez Auja y D. José Sargatal, ante el Cónsul mexicano residen-

te en la Habana, como conductos del vapor "Lola;" y la de D. Feliciano Troncoso, residente en esta ciudad, con igual carácter, porque es desconocido este recurso en las leyes fiscales de comiso, y porque la representacion legal de los propietarios del buque, la tienen su capitán, quien la ha estado ejercitando en este juicio. Por estos legales fundamentos, y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en los arts. 86 y 87 del Arancel de aduanas, en nombre de los Supremos poderes, falla:

1º Se declara caso de contrabando de los previstos en la fracc. 1ª y 2ª art. 86 de dicho arancel, el de los catorce bultos de efectos extranjeros aprehendidos en el rancho Zuculú, y el de los siete aprehendidos á bordo del "Lola," imponiéndose en consecuencia, la pena de confiscacion ó de comiso á dichos efectos y al vapor mencionado.

2º Se declaran libres de pena los efectos de rancho cuya lista se presentó á la aduana en su oportunidad, entregándolos á su legítimo dueño.

3º Que no tiene representacion en este juicio el vico Cónsul Español.

4º Sáquese testimonio de este fallo para remitir al Ministerio de hacienda por conducto de la aduana marítima del Progreso. Con lo que se concluyó la presente acta que firma el C. Juez, de que doy fe.—*J. Manzanilla.—José Anacleto Castillo.*

Pedimento del C. promotor fiscal del Tribunal de Circuito.

C. Magistrado:

La defensa que el capitán del vapor "Lola," intenta hacer á favor de este buque, va resintiéndose ya de los vicios de la chicana que la hacen ilegal y temeraria. Pendiente su solicitud, contrada á que en esta superioridad se abra á prueba el juicio de comiso, cuyas constancias obian certificadas en este expediente, quiere ahora

que se declare nulo lo actuado en 1ª instancia para que el procedimiento tenga lugar en la vía administrativa que desde luego elige; pero ni esta elección es oportuna después de haber consentido libremente el que lo hace en todo lo actuado en 1ª instancia, por la vía judicial, ni tendría derecho de elegir en ningún tiempo la que mas le conviniese para el procedimiento; porque no habiéndose presentado nadie, á pesar del edicto publicado para el efecto, alegando derecho alguno á las mercancías que constituyen el objeto del contrabando, el juicio tuvo que seguirse en rebeldía, y con los estrados del Tribunal para cumplir con lo que disponen en tales casos el art. 142 del decreto de 4 de Octubre de 1845. Y como no podían absolverse ó condenarse en un juicio las mercancías y en otro distinto el vapor, porque eso sería dividir la contienda de la causa, necesariamente en la sentencia que debía decidir sobre el punto principal del presunto contrabando de las mercancías extraídas del vapor «Lola» y rancho «Zuculú» debía resolverse también este incidente; porque primero era decidir si con dichas mercancías se había cometido ó no un verdadero contrabando, para resolver si como pena de él, debía decomisarse dicho buque, ó declarárselo completamente libre.

Jamás, por los principios comunes de la jurisprudencia, es lícito dividir la contienda de la causa, y las razones fundamentales de tal prohibición se encuentran indicadas en Suprema Circular de 2 del mes próximo pasado que la recuerda, pudiendo decirse que son exactamente aplicables á este caso, pues «sucedería que no fueran justas ni consiguientes las apreciaciones que se hicieron por diversos jueces, sin relación entre la causa principal y los incidentes.»

Por estos motivos y con fundamentos de los arts. 142 y 153 del citado Decreto de 4 de Octubre, y 87, fracción 1ª del Arancel vigente de Aduanas marítimas, el fis-

cal pide á vd., desoche la maliciosa articulación que por medio de su oculto de esta misma fecha, intenta introducir la parte del capitán del vapor «Lola» con el único objeto de entorpecer por estos medios reprobados el curso de este juicio, y acrecentar cada día los gastos que ocasiona el cuidado y conservación de aquel buque, los cuales protexta el fiscal que lo hará satisfacer, ya que tiene perdida muy justamente, la esperanza de poderlo libertar de las consecuencias de las operaciones de contrabando á que lo tenía dedicado en su tráfico con el puerto del Progreso, pues el fiscal está reuniendo los datos que comprueban, aunque no son necesarios para el objeto del presente juicio, que el caso de contrabando que lo motivó, no es el primero que el Sr. D. Salvador Rodríguez dejaba que se cometiera por nuestras costas, con el vapor «Lola» de su mando.

Mérida, Julio 1º de 1874.—*P. Higueros.*

Es copia que certifico. Mérida, Julio 23 de 1874.—*Prudencio Higueros.*

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Mérida, 11 de Julio de 1874.

Visto este artículo, promovido por D. Salvador Rodríguez, capitán del vapor español «Lola», pretendiendo que estos autos pasen á la Aduana marítima de Progreso, para que allí se siga el juicio administrativo: lo contestado por el Promotor fiscal, el Administrador y Contador de la referida Aduana marítima de Progreso; la citación para sentencia y cuanto mas consta en autos.

Considerando, en cuanto á la constitucionalidad del juicio administrativo: que, por el art. 50, Constitución Federal, el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que «nunca podrán reunirse dos ó mas de estos Poderes en una persona ó corporación.»

Que, en el juicio administrativo, establecido por los arts. 91 y 95 del Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas de 19 de Enero de 1872, el Poder Ejecutivo de la Union, por medio de las Aduanas, como primera instancia, y por el de la Secretaría de Hacienda, como segunda y última, ejerce atribuciones privativas del Poder Judicial, reuniéndose así en uno solo el ejercicio de dos Poderes.

Que, en la seccion II de la Constitucion, en que están especificadas las atribuciones del Poder Ejecutivo, no se encuentra la de administrar justicia en los casos de contrabando, ni en ningun otro caso.

Considerando: que, por el art. 90 de la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos, "se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federacion en una Corte Suprema de Justicia y en los Tribunales de Distrito y de Circuito."

Que, por el art. 97 de la misma, corresponde á esos Tribunales de la Federacion, conocer:

19 De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicacion de las leyes federales:

29 De las que versen sobre derecho marítimo.

39 de aquellas en que la Federacion fuere parte.

Que el juicio administrativo, establecido por los arts. 91 y 95 del Arancel de Aduanas marítimas y fronterizas, de 19 de Enero de 1872, no solamente es desconocido en la Constitucion Federal, sino que, despoja á los Tribunales establecidos por ésta, de la jurisdiccion y atribuciones que les acuerda, para traspasarlas á las Aduanas marítimas y á la secretaria de Hacienda, á voluntad de los interesados, en los casos de derecho marítimo que expresa el Arancel citado:

Considerando: que en la República Mexicana nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por Tribunales especiales, y que ninguna persona ni corporacion, puede

tener fuero, art. 13, Constitucion Federal.

Que el juicio administrativo, establecido por los arts. 91 y 95 del Arancel de Aduanas Marítimas, constituye un Tribunal especial, regido por leyes privativas, y con verdadero fuero á favor de los contrabandistas.

Considerando, dada por supuesta la constitucionalidad del juicio administrativo: que la falta de requerimiento á que se refiere el art. 91 cap. 22 del Arancel vigente, á efecto de que el interesado, dentro de veinte y cuatro horas, elija entre los dos recursos, judicial ó administrativo, no privó á D. Salvador Rodríguez, capitán del vapor español «Lola», de la facultad de reclamar oportunamente y ante quien corresponde el ejercicio de ese derecho: que, lejos de haber usado de esa facultad al tiempo de ser emplazado para la celebracion del juicio verbal de comiso, ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas, por el contrario, concurrió á él; contestó á la demanda fiscal; consintió en la declaracion de que el juicio se siguiese en rebeldía respecto de las mercancías halladas en el rancho Zuculú y á bordo del vapor de su mando, por no haberse presentado persona alguna que alegase derecho á ellas, á pesar de los edictos publicados; se dió por citado para oír sentencia definitiva; apeló de ésta, interviniendo en todos y cada uno de los actos del juicio principal y de la sustanciacion del recurso de apelacion interpuesto por él: Que la parte del capitán D. Salvador Rodríguez, por medio de su apoderado C. Lic. Iljinio Castellanos, se presentó ante este Tribunal de Circuito con el testimonio del juicio de comiso á mejorar la apelacion, promoviendo que fuesen recibidas algunas pruebas, á su juicio necesarias, para la defensa de los derechos que representa.

Considerando: que, por los actos ántes referidos, D. Salvador Rodríguez, capitán del vapor español «Lola», consintió con libre y espontánea voluntad en que el caso de contrabando á que se refieren éstas Jul-

gencias fuese conocido, seguido y fallado por el Juzgado de Distrito de Zacatecas: Que por ese consentimiento, el capitán D. Salvador Rodríguez se sometió al Juzgado de Distrito de este Estado, según el art. 228, incisos 2º y 3º, Código de procedimientos para el Distrito Federal y Ley 32 tit. 2, Part. 3ª, inciso 9º.

Que, aun suponiendo que el juicio administrativo á que se refieren los arts. 91 y 95 del Arancel de Aduanas vigente, constituye una verdadera jurisdicción, ésta sería del mismo género que la del Juez de Distrito; pues ambas se hallan entre la esfera de la administración de la justicia federal, en cuyo caso la jurisdicción que ejerce la Aduana marítima en la era administrativa se puede prorogar á la que ejerce el Juez de Distrito en la era judicial, Art. 229 del Código citado.

Considerando: que las mercancías extranjeras aprehendidas en el rancho Zuculá y en la carbonera del vapor Español "Lola" constituyen la materia principal de este juicio de comiso:

Que en presencia y con el consentimiento del capítulo, como antes se ha expresado, el Juzgado de Distrito, no habiendo comparecido ninguna persona que alegue derechos á los veinte y un bultos de efectos que se dice vueltos á bordo del vapor "Lola," declaró que debía continuarse el juicio en rebeldía, en este punto, extendiéndose las diligencias que se practiquen con los estados del tribunal: fs. 14 de este testimonio. Que por esta razón, no podría decidirse en la era judicial, la responsabilidad de las mercancías aprehendidas, materia principal del juicio, y en la administrativa la del vapor español "Lola," como presentó el conductor, sin decidir la continencia de la causa; lo cual está prohibido por las leyes.

Considerando, por último: que según el art. 91 ya citado del Arancel de aduanas, el derecho de elegir entre los dos juicios judicial ó administrativo, debe usarse oportunamente, con ó sin requerimiento ante

el Administrador de la aduana respectiva.

En conformidad y cumplimiento de las disposiciones antes citadas, he venido en declarar, y declaro:

1º El Juzgado de Distrito de Yucatan, ha conocido constitucional y legalmente del caso de contrabando á que se refieren estos autos.

2º Este Tribunal de Circuito está convencido también constitucional y legalmente del referido caso de contrabando.

3º No ha lugar, por tanto, á pasar estos autos á la Aduana marítima del Progreso para que conozca de ellos el en juicio administrativo. Así lo proveyó, mandó y firmó definitivamente juzgando, el C. Lic. José Antonio Cisneros, Magistrado de dicho Tribunal de Circuito, de que doy fé.—José Antonio Cisneros.—Mauricio Tejero.

Es copia fiel del fallo dictado en el artículo promovido por parte de D. Salvador Rodríguez, capitán del vapor español "Lola," pretendiendo que el juicio-comiso que se sigue á dicho buque, pase á la era administrativa, el cual se lee de frac. 48 á 49, del juicio expresado que se halla pendiente en este Tribunal de Circuito, á cuyo original me remito; y para su publicación en el *Semanario Judicial de la Federación*, por disposición verbal del C. Magistrado, libro la presente en este pliego de papel del sello quinto, en la ciudad de Mérida, á los 24 días del mes de Julio de 1874.—Mauricio Tejero.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Mérida, Setiembre 10 de 1874.

Vistos estos autos de juicio de Comiso, seguidos en el Juzgado de Distrito de este Estado de Yucatan, sobre la detención en el puerto de Progreso del vapor español "Lola," su capitán D. Salvador Rodríguez, por haberse aprehendido á su bordo varios bultos de mercancías extranjeras y otros en

el rancho de Zuculú: la sentencia que con fecha 1º de Junio último pronunció dicho Juzgado de Distrito, declarando caso de contrabando de los previstos en la fracción 1ª y 2ª, art. 86 del Arancel de Aduanas Marítimas vigente, el de los catorce bultos de efectos extranjeros aprehendidos en el rancho de Zuculú, y el de los siete aprehendidos á bordo del vapor «Lola», imponiendo en consecuencia la pena de comiso á dichos efectos y al mencionado vapor, y declarando libres de pena los efectos de rancho, cuya lista se entregó á la Aduana en su oportunidad, y que no tiene representación en este juicio el vice-cónsul español; la apelación interpuesta de dicha sentencia, por parte del capitán D. Salvador Rodríguez, concedida en acta de 9 del citado Junio; sus escritos presentados ante esta segunda instancia, los días 29 de Julio último y 5 del actual; su expresión de agravios, lo alegado y pedido por el ciudadano Promotor fiscal, así como lo expuesto por el Administrador y por el Contador de la Aduana marítima de Progreso: la citación para sentencia y cuanto de autos consta:

Considerando: Que según el art. 5º del Arancel vigente, toda embarcación mercante queda sujeta á las penas establecidas en él por las infracciones que se cometan desde el momento de su arribo, que consiste en la entrada á las aguas territoriales: que como consecuencia de este artículo, las mercancías valiosas, maliciosamente ocultas en la carbonera del vapor «Lola», quedaron introducidas en el puerto desde que entró en sus aguas el referido vapor: que se ha probado plenamente en los autos que esas mercancías no venían con los documentos prevenidos en el Arancel, ni como exceso de las pocas manifestadas y despachadas legalmente; pues en este caso, ó se hubieran encontrado al tiempo de despacharse, ó por lo menos al verificarse la visita de fondeo; por el contrario, aparece que el vapor quedó completamente descargado y que el capitán hizo la protesta de ley de que no

traía mas mercancías que las expresadas en su manifiesto general, y que venía con su buque comerciando de buena fe, resultando infringido el art. 86, fracción 2ª del Arancel, que no exige el desembarque de los efectos por ser objeto de la fracción 3ª

Considerando: Que en el presente caso no puede aplicarse la fracción 5ª del art. 86, por referirse solamente á omisiones y no á ocultación premeditada por empleados de la embarcación.

Considerando: Que tampoco puede aplicarse aisladamente el art. 51 del Reglamento de Aduanas, que también se refiere á omisiones y excesos, tanto por ser concordante con la fracción 5ª, art. 86, fracción 3ª, art. 87 del Arancel, cuanto porque como reglamentario, no puede contrariar á la provención del Arancel, que es la ley, ni modificar su sentido.

Considerando: Que aun cuando se quisiesen apreciar como excesos los siete bultos de mercancías encontrados en la carbonera del vapor, tampoco deberían aplicarse los triples derechos de la fracción 3ª del art. 87, por no haberse hallado, como resultado de las operaciones ordinarias de la Aduana, condición indispensable, según el sentido jurídico de esos artículos, sino por la pesquisa de la justicia, que hace desaparecer las consideraciones favorables de la ley.

Considerando, por último: Que aun en el caso de no hacerse mérito de la ocultación ni de la convicción que produce en el ánimo del Juez, el haberse hallado en la costa, durante la permanencia del vapor, catorce bultos semejantes á los siete ocultos á bordo, en sus marcas, numeración correlativa y calidad de las mercancías, debe tenerse en cuenta el art. 31 del Arancel de 4 de Octubre de 1845, que debe aplicarse de conformidad con la Circular de 26 de Julio del presente año, por no estar en oposición en ese punto al Arancel vigente, que no expresa hasta dónde pueden llegar los excesos á omisiones en que se incurre

Por estos fundamentos legales y por los expuestos en la sentencia de 1.^a instancia, á nombre de los Supremos Poderes de la República, he venido en declarar y declaro: Se confirma en todas sus partes la referida sentencia que el día 1.^o de Junio del presente año pronunció el Juzgado de Distrito de este Estado de Yucatan, en el juicio de Comiso á que se refiere este Toca. Mátese saber y elevense estos autos, con atento oficio, á la Corte Suprema de Justicia, para su competente revision. Y por este que el ciudadano Magistrado segundo suplente en ejercicio proveyó, definitivamente juzgando, así lo mandó y firma, de que doy fé.—*Carlos Peon.—Mauricio Tejero.*

Es copia fiel del fallo que se lee de fojas 110 á 111 del Toca al juicio de Comiso del vapor español «Lola», segundo en el Juzgado de Distrito de este Estado de Yucatan, y el cual va á elevarse á la Corte Suprema de Justicia para su revision, á cuyo Toca me remito. Y para su publicacion en el *Semanario Judicial* de la Federacion, por disposicion del ciudadano Magistrado funcionario, libro la presente en Mérida, á 26 de Setiembre de 1874.—*Mauricio Tejero.*

Pedimento del C. Procurador general de la Nacion.

El Procurador General interino dice: que en el Juzgado de Distrito de Yucatan, se inició en 28 de Mayo del corriente año, el presente juicio de comiso contra 14 bultos de mercancías que se encontraron ocultos en el rancho de «Zuculá», y que se presumia fueron desembarcados del vapor español «Lola» fondeado en el puerto del Progreso, procedente de la Habana, á los que se agregan 7 bultos de mercancías del mismo género que fueron encontrados en la carbonera del expresado vapor, sin venir incluidos en un manifiesto general. Verifi-

cada la junta de ley, á la que concurren, el Promotor fiscal y el capitán del vapor, D. Salvador Rodríguez y Rodríguez, acompañado del vice-cónsul de su nacion, D. José Dominguez, se rindió la prueba que se juzgó necesaria, y el mencionado Juzgado de Distrito por sentencia de 1.^o de Junio, declaró:

1.^o Que era caso de contrabando de los previstos en la fac. 1.^a y 2.^a, art. 86 del Arancel de 1.^o de Enero de 1872, el de los 14 bultos extranjeros aprehendidos en el rancho de Zuculá, y el de los 7 aprehendidos á bordo del vapor «Lola», imponiéndose, en consecuencia, la pena de confiscacion ó de comiso á dichos efectos y al vapor mencionado.

2.^o Declaró libres de pena los efectos de rancho cuya lista se presentó á la Aduana en su oportunidad, mandando entregarlos á su legítimo dueño:

3.^o Declaró que no tenia representacion en este juicio el vice-cónsul español, y por último, mandó que se sacase testimonio del fallo, para remitirlo al Ministerio de Hacienda.

En el acto de la notificacion que de la anterior sentencia se hizo al capitán del vapor decomisado, apeló de ella, y ésta apelacion le fué admitida en 5 de Junio del presente año, para el efecto de defender la propiedad del vapor, dando principio la sustanciacion de éste recurso, un escrito presentado por el apelante ante el Tribunal de Circuito de Mérida, en que pidió, que ántes de expresar los agravios causados por la sentencia del inferior, se mandase recibir la prueba que ofrecia, á cuyo efecto señalaba las constancias respectivas; y habiéndose corrido traslado del artículo al Promotor fiscal, se conformó con que se recibiese la prueba ofrecida. Citadas las partes para resolver sobre éste punto, fué interrumpida la resolucion por la interposicion de nuevos artículos promovidos por el apoderado de Rodríguez y Rodríguez, hasta que terminados éstos, se decidió por auto de 20

de Junio, que debía admitirse la prueba, señalando tres días para recibirla. En 22 del mismo mes, y estando dentro del término, se presentó el C. Iliginio Castellanos, ofreciendo nueva prueba testimonial, á cuya recepcion se opuso el Promotor fiscal, y con fecha 25 se citó para resolver sobre la admision de la nueva prueba, cuyo artículo fué nuevamente interrumpido por diversas recusaciones, que ya con causa, ya sin ella, interpuso la parte apalante; hasta que finalmente, por auto de 8 de Agosto, de conformidad con lo pedido por el Promotor fiscal y con fundamento de las leyes 7ª tít. 14, pag. 3ª y 5ª tít. 10 lib. 11 N. R., concordantes con el art. 156 del Arancel de 4 de Octubre de 1845, se declaró sin lugar la nueva prueba solicitada por parte de D. Salvador Rodriguez y Rodriguez. Interpuesto de este auto el recurso de súplica, y declarado sin lugar por auto de 2 de Agosto, previniéndose al mismo tiempo, se entregaran los autos al apelante para la debida expresion de agravios de la sentencia definitiva pronunciada por el inferior en 1º de Junio del corriente año, interpuso el recurso de denegada suplicacion, que lo fué admitido en 26 del mismo mes, señalándosele el término de 30 días, para que ocurriera á ésta Suprema Corte. En cumplimiento del auto anterior, presentó un escrito de expresion de agravios, la parte del mencionado capitan, y contestado por el Promotor fiscal, mandó el C. Magistrado de Circuito, citar para definitiva; entretanto, se presentó Rodriguez por medio de un apoderado, C. Joaquín M. Alcalde, ante ésta Suprema Corte, mejorando el recurso de denegada suplicacion sobre el punto de nueva prueba, cuyo recurso ha permanecido en suspenso en espera de la remision de las constancias que señalaron en dicho escrito, y que fueron pedidas por ésta sala en oficio de 22 de Setiembre. Durante el tiempo trascurrido, el C. Magistrado 2º suplente en ejercicio, pronunció sentencia definitiva, confirmando, en 10 de Setiembre último,

por sus propios legales fundamentos, la sentencia del inferior, y remitiendo los autos á ésta Suprema Corte para su revision.

Notificada ésta determinacion al capitan del vapor español «Lola,» suplicó de ella, y recusó al C. Magistrado de Circuito, que la pronunció; y habiéndose declarado sin lugar ambos recursos, interpuso el de súplica denegada en ambos puntos, presentándose á ésta Corte á mejorarlos, é interponiendo, ademas, por medio de su apoderado Iliginio Castellanos, el recurso de nulidad, que hace consistir en la falta de competencia del Tribunal que la pronunció; en haberle negado la prueba y la defensa; en la falta de jurisdiccion del Magistrado que la pronunció, por estar recusado con causa; en que el fallo, fué dictado con infraccion del art. 86, fracc. 5ª del Arancel, que imponiendo triples derechos á las mercancías de los bultos de mas, ha hecho extensiva la pena de Comiso al vapor «Lola,» á lo que se agrega, que fué pronunciada con infraccion del art. 14 de la Constitucion Federal, porque se apoya en una circular dada des pues de la aprehension de aquel barco, y que no puede tener efecto retroactivo al restituir la sancion del Arancel de 1845, y por último, en la falta de exactitud al aplicar el art. 5º, cap. 2º del citado Arancel.

El que suscribe, es de opinion que no puede sostenerse legalmente el recurso de súplica denegada, interpuesto por el apoderado del capitan del vapor español «Lola,» del auto en que el Tribunal de Circuito negó la apelacion sobre el punto de nueva prueba, porque el extrato anterior que da á conocer todo el procedimiento que dicho Tribunal observó en la sustanciacion de 2ª instancia, marca lo ilegal é inútil de semejante pretension; pues se ha intentado rendir dicha prueba antes de dar principio la 2ª instancia, que conforme á la ley y práctica constante, no comienza sino con el escrito de expresion de agravios, siguién-

do la sustanciacion en los mismos términos de la primera; así es, que sin que se abra el término probatorio en dicha instancia, ni puede rendirse ninguna prueba, ni tiene valor la que se reciba, á lo que se agrega, que son incuestionables los fundamentos en que se apoya el Magistrado de Circuito para declarar sin lugar la prueba ofrecida, pues el texto de las leyes que sirven de fundamento, claramente previenen á los jueces que no admitan pruebas notoriamente impertinentes que nada aprovechen á los interesados, siendo bien sabido que en la 2ª instancia no deben admitirse pruebas sobre los mismos puntos ó derechamente contrarios de los que se suscitaron en la 1ª instancia, y ambas nulidades, se notan á la simple vista del interrogatorio que presentó el mencionado capitán, que obra á fs. 67 del Toca del Tribunal de Circuito.

Por lo que hace á la sentencia definitiva pronunciada por el referido Tribunal, confirmatoria de la sentencia del inferior, no hay duda, que por ser conforme de toda conformidad, causó ejecutoria con arreglo al art. 152 del Arancel de 4 de Octubre de 1845; y por lo mismo no se dá de ella el recurso de súplica, ni tampoco tiene lugar el de nulidad, ya porque el expresado arancel solo deja á las partes el de responsabilidad, ya tambien porque el capitán Rodríguez y Rodríguez, lo tienen así reconocido en su escrito que obra á fs. 42 del citado Toca. No siendo por otra parte, de tomarse en consideracion los fundamentos que aduce en defensa, por que son notoriamente inexactos todos y caña uno de los fundamentos en que se apoya, bastando para convencerse de ello, hojear inmediatamente los autos.

Por último, como en la sustanciacion de la 2ª instancia se notan diversas irregularidades, que si bien no dan lugar á la formacion de causa, se hace indispensable que se hagan notar á los Magistrados que incurrieron en ellas, para que las eviten en

TOMO VII—PARTE II.

lo sucesivo y no den ocasion á la prolongacion innecesaria de los juicios.

Por estos motivos, el Procurador general concluye pidiendo á esta 1ª Sala, se sirva aprobar las siguientes proposiciones;

1ª Se confirma en todas sus partes el auto de 21 de Agosto, por el que el Tribunal de Circuito de Mérida negó el recurso de apelacion sobre la negacion de la nueva prueba.

2ª Se declara que no ha lugar al recurso de súplica y nulidad, interpuesto por el capitán del vapor español «Lola», de la sentencia definitiva, que confirmó la del Juzgado de Distrito de Yucatan,

3ª Que se haga á los magistrados de Circuito el apercibimiento que queda indicado, y por último, que se dé por revisado el proceso.

México, Noviembre 10 de 1874.—Guzman.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 17 de 1877.

Visto el juicio sobre comiso de 14 bultos mercancías que se descubrieron ocultos en el rancho llamado Zuculú, previniéndose fueran importados al puerto del Progreso, por el vapor español «Lola», con mas, otros siete bultos tambien de mercancías que fueron encontradas en la carbonera del expresado vapor; vista la sentencia de 1ª instancia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Zacatecas. Visto el auto interlocutorio que con fuerza de definitivo, dictó el Tribunal de Circuito de los Estados de Yucatan, Campeche, Tabasco y Chiapas, en 21 de Agosto del año próximo pasado, negando la admision de la nueva prueba ofrecida por el representante del capitán del referido vapor, y de cuya determinacion suplicó el agraviado: Vista la sentencia definitiva pronunciada por el expresado Tribunal, en 10 de Setiembre del

año próximo pasado, contra la que igualmente se suplicó, y negando el recurso se interpuso el de súplica denegada, así como también el de nulidad: Visto lo pedido ante esta primera sala, por el C. Procurador General interino; oído lo alegado al tiempo de la vista por el C. Lic. Joaquín Alcalde, como patrono del capitán mencionado, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando 1º: Que respecto del auto de 21 de Agosto de 1874, la prueba ofrecida por el representante del capitán del vapor «Lola» además de ser extemporánea, é implicando por lo mismo una notoria fustigación en los procedimientos del juicio, adolece de los defectos de versar sobre los mismos artículos que se habrán ventilado, y de que aun rendida habría sido impertinente, porque de nada hubiera aprovechado á la parte que la promovió; defectos que la hicieron inadmisible y el juzgador estuvo en su derecho para desocharla «la non debó consentir que las partes despicudan el tiempo en vano» ley 7ª tít. 14, part. 3ª y 5ª, tít. 10, lib. 11 N. R., y art. 156 del reglamento de Aduanas, de 4 de Octubre de 1854.

2º Que por lo que toca al recurso de súplica intentado contra la sentencia definitiva de 2ª instancia, ésta ha causado ejecutoria, por ser de entera conformidad con la de primera, y semejante recurso, está expresamente prohibido por el art. 152 del Arancel de Aduanas citado.

3º Que respecto del de nulidad, tanto el art. 147 como en su referente el 152 del mencionado Arancel que marca y precisa el procedimiento que debe seguirse en los juicios de comiso, no conceden otro recurso que el de responsabilidad, de lo que se deduce, que el de nulidad queda desechado; que las leyes reglamentarias de los juicios, deben ser observadas literalmente, y por lo mismo, cualquiera alteración en esta materia, importaría un vicio.

4º Que desprendiéndose del mismo tex-

to de la ley que la mente del legislador ha sido establecer un procedimiento propio, especial y determinado para los juicios de comiso, sería contravenir á su espíritu, dar entrada á recursos establecidas para juicios de un orden enteramente diverso.

5º Notándose en los procedimientos de segunda instancia, algunas irregularidades, que importan una veleidada responsabilidad y dejándolas pasar desapercibidas, podrán respetarse en lo sucesivo con detrimento de la buena administración de justicia.

Por tales consideraciones, con fundamento de las disposiciones antes citadas y de conformidad en lo conducente con lo pedido por el C. Procurador General, se declara:

Primero: Que se confirma en todas sus partes el auto de 21 de Agosto, por el que el Tribunal de Circuito de Mérida, negó el recurso de apelación, sobre la negación de la nueva prueba.

Segundo: Se declara que no ha lugar al recurso de súplica y nulidad interpuesto por el capitán del vapor español «Lola» de la sentencia definitiva que confirmó la del Juzgado de Distrito de Yucatan.

Tercero: Procédase á abrir responsabilidad á que haya lugar respecto del Magistrado del Tribunal de Circuito que continuó conociendo despues de haber sido recusado; á cuyo efecto, remítase la causa á la Sala de esta Corte Suprema de Justicia á que toca en turno.

Cuarto: Remítase copia certificada de esta sentencia al Tribunal de Circuito, de que se recibió la causa, para los efectos consiguientes. Hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron:—*José María Iglesias.*—*M. Arza.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio*

cio Allamirano.—Luis Velazquez.—Enrique Landa, secretario.

Son copias. México, Marzo 5 de 1875.
—*Enrique Landa.*

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Guanajuato por Ventura Ortiz, contra el C. Jefe político de Purísima del Rincón, que lo ha juzgado y condenado á la pena de muerte.

Pedimento del C. promotor Escal.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, dice: Ventura Ortiz promovió el presente recurso de amparo, contra el Jefe Político de Purísima del Rincón que lo juzgó y condenó á la pena de muerte, violando en concepto del quejoso las garantías individuales consignadas en las cinco fracciones del art. 20, y en los arts. 21 y 23 de la Constitución Federal.

El Jefe Político de Purísima del Rincón informó que el quejoso no había sido juzgado por el delito de rebelión como afirmaba en su primer escrito, sino como salteador y con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871. A este informe no se acompañó ningún justificante, por lo cual supuesta la contradicción entre el escrito de queja y este informe, el juzgado ordenó se recibiera el juicio á prueba, en cuyo término se agregó á las actuaciones el testimonio del proceso que motiva la interposición de este recurso de amparo.

El que suscribe, ha examinado detenidamente el proceso instruido á Ventura Ortiz que no se compone sino de las declaraciones de ocho testigos, dicen, apoyados en la voz pública, que el procesado es salteador. Refieren algunos robos de los que lo supu-

nen autor, pero ninguno de ellos aparece probado legalmente; se certificaron varias denuncias de robos que se atribuyen al quejoso, pero ninguno de ellos cuidó la autoridad política que formó el juicio, de hacerlos constar de una manera legal. El único fundamento de la sentencia es, que el reo perteneció á una gavilla de malhechores, pero como antes se ha dicho, no está probada la existencia de uno solo de los delitos que se dice cometió dicha gavilla.

En el proceso en consecuencia, falta la prueba de la existencia del delito, que para la aplicación de cualquiera ley, y principalmente de la ley que se aplicó á Ventura Ortiz, es tan necesaria que sin la comprobación del cuerpo del delito, no puede formarse un proceso.

La Suprema Corte de Justicia en casos análogos al presente, ha resuelto que el examen y la valorización de las pruebas que resulten contra el procesado son de la exclusiva competencia de las autoridades políticas que están encargadas de la aplicación de la ley de suspensión de garantías para los salteadores y plagiarios, pero cuidando siempre que aparezca probada la existencia del delito de asalto y plagio.

En el caso que el Juzgado tiene que resolver, no está demostrada la existencia de ninguno de los hechos que refieren los testigos que declararon en el proceso, y en consecuencia, no aparece demostrado tampoco si el quejoso debió ser juzgado conforme á la ley de 18 de Mayo de 1871, por cuyo motivo el Promotor fiscal es de opinión que el juzgado debe concederle el amparo que solicita.

Guanajuato, Octubre 23 de 1874. —*José Aguilar y Córdova.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guanajuato, 13 de Noviembre de 1874.

Visto el presente juicio de amparo promovido por Ventura Ortiz, contra el C.